

OPINIÓN



TRIBUNA

GERMÁN
BARRIOS GARCÍA

El presidente del CES defiende una recuperación basada en la igualdad social; advierte de las debilidades que amenazan la consecución de ese objetivo; y afirma que la Comunidad tiene una ocasión «histórica» para abordar el cambio de modelo productivo

Por una recuperación inclusiva

Ya nadie niega la recuperación económica, pero no debe ni puede interpretarse sólo en clave económica. La compleja realidad que es toda sociedad requiere que sus tres pilares básicos se sustenten unos a otros: la economía, el trabajo y el bienestar social. De lo contrario el desequilibrio y la desigualdad acaban por desgajar, de nuevo, el equilibrio social, haciendo las crisis más largas, más profundas, y más difíciles de superar.

La economía creció en 2014 el 1,4%, tanto en nuestra Comunidad como en España. Y tanto los datos del primer trimestre de 2015, como las previsiones para el segundo, y para el año en su conjunto, elevan la tasa de crecimiento en cifras cercanas o superiores al 3,5%. Hay importantes razones para alegrarse de la recuperación económica, pero sus beneficios deben llegar a todo el mundo.

Tras 6 años consecutivos de destrucción de empleo, en 2014, se incrementó la ocupación, en nuestra Comunidad (+0,4%) y en España (+1,2%). El primer trimestre de 2015 muestra una continuidad, y la ocupación se incrementó también en Castilla y León (+1,31%) y en el resto de España, (+2,97%).

Como decía al principio, no podemos negar que estamos ante un crecimiento económico y una recuperación de nuestra economía, pero el crecimiento

económico no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para mejorar la situación de las personas. Lo que legitima a la economía es la capacidad de dar oportunidades a todos, es decir, que nuestro crecimiento económico se sustente sobre «la inclusión de las personas».

Todo indica que seguiremos creciendo durante 2015 y 2016; el empleo crecerá incluso a un ritmo mayor que antes de la crisis, para los mismos niveles de crecimiento de nuestro PIB. El problema está en si podremos superar la barrera de los 18 millones de ocupados (950.000 en Castilla y León), para poder mantener unos servicios esenciales de calidad y nuestro actual sistema de pensiones. Por eso es necesario estudiar nuestras debilidades, para poder afrontar una recuperación sostenida e inclusiva.

«Lo que legitima a la economía es la capacidad de dar oportunidades a todas las personas»

La primera debilidad a la que nos enfrentamos es que nuestra tasa de desempleo sigue siendo superior al 20%, concretamente el 20,38% en Castilla y León, 3,4 puntos por debajo del 23,78% de España. Por ello, el mayor problema de Castilla y León, y de España, continúa siendo el elevado desempleo. Hay 233.700 trabajadores desempleados en nuestra Comunidad. De ellos 83.000 son mayores de 45 años (el 35,5%), 146.000 son parados de larga duración (el 62,5%) y, de estos últimos, casi 100.000 llevan más de dos años en el paro, lo que supone que se encuentra en esa situación el 42% de los parados de nuestra Comunidad. La mayor tasa de paro hace mella en los jóvenes: un 53,54% están en paro.

Mientras persistan los altos datos de desempleo, hay que fortalecer la protección a las personas desempleadas. La cobertura de las prestaciones y subsidios no alcanza en nuestra Comunidad ni a la mitad de los desempleados. Es la tasa más baja de los últimos años y una de las más bajas de España. Esta cifra es una auténtica llamada de alerta para que las políticas de protección social garanticen unas rentas dignas para todas las personas trabajadoras desempleadas.

La segunda debilidad es menos visible, pero igual de grave: me refiero a la población activa y al envejecimiento de la población. La población activa sigue bajando trimestre a trimestre en términos interanuales. Este proceso afecta especialmente a los trabajadores jóvenes, los que tienen desde los 20 hasta los 35 años. Ahora bien, el envejecimiento de la población activa es un problema global, que afecta ya a todas las comunidades autónomas, y las soluciones sólo se pueden abordar de forma conjunta con las políticas estatales, para lo que hará falta un alto grado de diálogo y de consenso.

A ello se suma que, según los datos del INE a nivel nacional, el 62,12% de todos los activos, donde tienen un mayor peso los mayores de 35 años, sólo han alcanzado como máximo la enseñanza secundaria o bachillerato. Esto refleja una carencia de profesionalización o especialización, que resta posibilidades de empleabilidad. Y es una muestra evidente de las debilidades de las políticas de formación profesional y para el empleo.

Además, esta realidad no es homogénea, ya que presenta grandes diferencias territoriales dentro de nuestra Comunidad. Este factor es clave a la hora de abordar con éxito las políticas públicas de equilibrio económico, laboral y social.

Hay más problemas, pero no se pueden abordar fácilmente desde las políticas autonómicas. Me refiero al incremento del número de trabajadores contratados temporalmente, por encima del 20% sobre el total, y al aumento del número de trabajadores que sólo consiguen un trabajo a jornada parcial, que llega casi al 40%.

Nos encontramos ante una oportunidad histórica, para que esta nueva fase sea aprovechada en nuestra Comunidad para realizar decididamente el cambio de modelo productivo, que aporte estabilidad en la economía, que equilibre nuestro mercado laboral, y que haga realidad la inclusión social.

El cambio de modelo productivo debe sustentarse sobre el conocimiento, lo que hace de la educación la herramienta fundamental para mejorar nuestro capital humano, y no debemos olvidar la inversión en innovación que mejora nuestro capital tecnológico, al igual que debemos apostar por productos con valor añadido, es decir, por productos con calidad y marca diferenciada.

A los factores de productividad hay que añadir una estrategia de competitividad que se base en políticas que apoyen y faciliten el tamaño y crecimiento empresarial. No en vano, según el Directorio Central de Empresas (Dirce) el 96% de nuestras empresas son micropymes que tienen menos de diez trabajadores.

Las energías renovables y la biomasa seguirán

ganando la partida poco a poco al resto de energías, en precio y en disponibilidad, generando competitividad para nuestro tejido industrial y empresarial, y aportando su granito de arena a un crecimiento ambientalmente sostenible.

La apertura de la economía de Castilla y León, está alcanzando cotas cada vez mayores, logrando poco a poco ratios más alentadores en la tipología de nuestras exportaciones e importaciones, donde paulatinamente van teniendo menos peso los productos de consumo final (hay que tener en cuenta que las importaciones de bienes de equipo que sirven para elevar la productividad de las empresas no son negativas, sino todo lo contrario).

Pero aún hay que avanzar, y mucho, en la aportación de tecnología e innovación a los bienes y servicios que importamos para transformarlos y volverlos a exportar, con un mayor valor añadido. Y, para ello, necesitamos incrementar los esfuerzos en desarrollo de la alta y muy alta tecnología en nuestra Comunidad, sobre todo en campos como la biomedicina, y todo lo referente a la economía digital, como ejemplos más destacados.

El afianzamiento del crecimiento económico y la contribución del consumo a la demanda interna, con mayor peso de productos propios y menor peso de los importados, provocarán, colateralmente, esa apertura de nuestra economía, mayor y más equilibrada; con una mayor aportación de empleos de más calidad y mejor remunerados (ya que la remuneración de los asalariados irá pareja al aumento de la productividad), y una mayor capacidad para retener el talento de nuestros jóvenes; y, por todo ello, más recursos para una redistribución de la riqueza que sea inclusiva para todos los ciudadanos de Castilla y León.

Pero el cambio de modelo productivo tiene que



ahorrarse sobre las bases del Diálogo Social. Sólo si empresarios y sindicatos saben llegar a acuerdos con la ayuda de las instituciones y del Gobierno regional podrá lograrse el cambio de modelo.

Para afrontar el problema de la «precariedad laboral» es necesario abordar un impulso del Diálogo Social a nivel nacional, pero también igual de importante es dar continuidad al impulso del Diálogo Social en Castilla y León, para que en esta nueva etapa, política y económica, se sigan alcanzando nuevos consensos, y se sigan impulsando acuerdos, tanto en las políticas económicas y laborales, como en las políticas sociales; mejorando los instrumentos de protección social, como la Renta Garantizada de Ciudadanía, por citar la más destacada; dotando a las políticas activas de empleo de una mayor capacidad y eficacia en su doble función, como políticas sociales de empleo y como políticas de empleabilidad; y abordando nuevas metas y objetivos, en aspectos en los que se puede avanzar mucho, como en la política de vivienda y de protección a las familias.

También debe buscarse el máximo consenso entre los distintos grupos parlamentarios para que podamos consolidar un crecimiento económico estable y generador de empleo de calidad.

Ahora bien, esto sólo será posible con un Gobierno regional estable, que sepa buscar el consenso y que transmita cohesión y eficacia para poder convertir las debilidades en oportunidades.

Germán Barrios García es Presidente del CES